

Ciudadanía y espacio público en el hábitat popular: el caso del predio El Molino en Iztapalapa, ciudad de México

Edgar Baltazar Landeros¹

Y no cabe imaginar a la ciudad como un mueble grandote ahí puesto, ni tampoco como una maquinaria, ni siquiera como el escenario de la vida social o el reflejo de la cultura, sino como un pensamiento que ha tenido, entre otras ocurrencias, la de inventar a los ciudadanos.

Pablo Fernández Christlieb (1991)

INTRODUCCIÓN

El objeto de estudio de este trabajo es el proceso de construcción de ciudadanía y espacio público en el hábitat popular urbano. La ciudadanía es concebida en este trabajo como una forma de pertenencia política a la colectividad, la cual se corrobora con la participación en los asuntos públicos. La construcción de ciudadanía es entonces un proceso dinámico que se alimenta de prácticas sociales (Turner, 1993). Hay maneras de hacerse ciudadano, la ciudadanía no es un estado fijo sino un objeto de disputa y transformación.

Al hacer ciudadanía se hace ciudad (Borja y Herce, 2002; Carvajal, 2009; Ramírez, 2009a; Tamayo, 2010). Las prácticas

¹ Maestro en Estudios Políticos y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México.

ciudadanas se contextualizan por espacios configurados a través de las mismas. Estas prácticas pueden adecuarse a un marco de participación instituida desde el Estado o bien bordear dichos límites (Arditi, 1995, 2003, 2007, 2010).

En la ciudad, el elemento que quizás concentra más la dinámica política de la sociedad es el espacio público (Borja y Herce, 2009; Borja Herce y Muxí, 2000; Mandanipour, 2003). Este espacio es un lugar practicado, escenario y producto de relaciones conflictivas de poder por definir lo abierto, común y accesible para la sociedad (Flyvbjerg, 2001; Rabotnikof, 2005). No se trata necesariamente del espacio del consenso y la deliberación, sino de la dimensión material de las múltiples prácticas ciudadanas, las cuales no necesariamente se adecuan al consenso sino a la práctica del desacuerdo y la cooperación que pueden generar entendimiento, mas no acuerdos comunes. Las formas de hacer espacio público pasan entonces a ser maneras de hacerse ciudadano.

En este trabajo, la relación entre ciudadanía y espacio público se explora para el caso del hábitat popular. Es decir, el entorno social, natural y construido que satisface las necesidades de morada y habitabilidad de los grupos sociales de menores ingresos (Buthet, 2005; Velásquez, 2010).

Esta articulación entre ciudadanía, espacio público y hábitat popular, se observará a la luz de un laboratorio de análisis: el predio El Molino en la Delegación Iztapalapa de la ciudad de México. El Molino (EM) es un lugar practicado por ciudadanos que han luchado por el ejercicio de su derecho a la vivienda, así como a la construcción de un hábitat deseado. Este proceso ha sido eminentemente político y ha sido objeto de diversas investigaciones (Álvarez, 2004; Moctezuma, 1999, 2012; Paladino, 2010; Ramírez Sáiz, 2005).

Tomando en cuenta los hallazgos aportados por estudios precedentes y por la indagación en terreno, se busca describir aquí el proceso de construcción de ciudadanía y espacio público en EM. Este lugar nació en 1985 gracias a organizaciones sociales del Movimiento Urbano Popular (MUP): Unión de Colonos Inquili-

nos y Solicitantes de Vivienda-Libertad (UCISV, mejor conocida como Cananea, adherida a la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata, UPREZ), así como las cooperativas Allepetlalli (posteriormente fundadora del Frente Popular Francisco Villa, FPVF), Unión de Solicitantes y Colonos por la Vivienda-Pueblo Unido (Uscovi) y la cooperativa Ce Cualli Ohtli.²

Después del asentamiento de las cuatro organizaciones fundadoras, el predio, que tiene una extensión de 843 987 metros cuadrados, se ha urbanizado con nuevos asentamientos, encabezados igualmente por grupos organizados. En la actualidad, en EM se asientan 14 conjuntos habitacionales, que corresponden a 4 555 viviendas y a una población aproximada de 19 mil habitantes (Ferniza, 2007).

LA CONSTRUCCIÓN POLÍTICA DEL HÁBITAT POPULAR

El hábitat popular urbano es el entorno cultural, social y natural, constituido como lugar de prácticas sociales espacializadas, encaminadas al acceso a la ciudad por parte de las clases populares. Es la base del intercambio político entre grupos no incorporados al mercado formal de vivienda y los intentos gubernamentales por regularizar sus asentamientos. Se consolida mediante procesos de autoconstrucción, regularización y gestión del territorio.

El hábitat popular de la ciudad de México es preponderante (aunque no es la única versión de ciudad existente). En él habita

² No existe consenso ortográfico para Allepetlalli y Ce Cualli Ohtli; aquí se utiliza la versión mayormente referida por los habitantes de El Molino, independientemente de que ésta conste en la nomenclatura oficial. Por razones metodológicas, el presente estudio se ocupa primordialmente del proceso político seguido por las organizaciones fundadoras de El Molino, las cuáles son susceptibles de un análisis longitudinal, desde la ocupación del predio hasta las prácticas vigentes relativas a la construcción de ciudadanía y espacio público. Un diagnóstico integral de EM, deberá incluir la experiencia de las demás organizaciones, lo cual ha quedado fuera de los alcances de este estudio.

aproximadamente 60% de la población de la ciudad (Duhau y Gigilia, 2008), que ha optado por las diversas formas de construcción de la ciudad popular, como el fraccionamiento ilegal de tierras privadas y ejidales, la invasión, la construcción a partir de créditos estatales o bien la adquisición legal de terrenos para llevar a cabo un proceso de autoconstrucción progresiva.

En el Distrito Federal, la Delegación Iztapalapa es un claro ejemplo de urbanización popular, pues prácticamente la totalidad de su territorio corresponde a ese hábitat. Ubicada al oriente del DF, Iztapalapa cuenta con una superficie 116.17 km². La Delegación está conformada por 241 localidades que urbanizan 92.7% de su territorio; el 7.3% restante corresponde al suelo de conservación donde se ubica en el Cerro de la Estrella y la parte alta de la Sierra de Santa Catarina.³

De acuerdo con el Censo 2010 de INEGI, Iztapalapa tiene una población de 1 815 786 habitantes, siendo así la demarcación más poblada del país. Desde los años setenta del siglo pasado, Iztapalapa ha sido una demarcación receptora de población de bajos recursos, la cual ha ocupado el territorio sin obedecer a planeación urbana alguna. Iztapalapa ha sido la principal receptora del crecimiento de la mancha urbana dentro del Distrito Federal (DF). Entre la población de la demarcación, 53% percibe menos de dos salarios mínimos, mientras en el DF la cifra es del 42.4%; 58% de la población no cuenta con seguridad social y 60% de las unidades territoriales de la Delegación han sido clasificadas como de alta y muy alta marginación.

Es en este contexto concentrador de desventajas que emerge EM como una alternativa urbana para la reivindicación del derecho al hábitat por parte de las clases populares. En 1984, el Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonhapo), entonces dirigido por Roberto Eibenschutz, autorizó el crédito para las cuatro

³ Datos de INEGI, del Programa Delegacional de Desarrollo 2009-2012 y del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano 2008.

organizaciones fundadoras del predio. Así comenzó el exitoso proceso autogestivo de producción social del hábitat.

Fonhapo realizó un plan maestro para el predio entre 1984 y 1985. EM fue fraccionado entre las organizaciones, en función de las acciones de vivienda que estas impulsarían: UCISV Libertad, 1087; Allepetlalli, 384; USCOVI, 274 y Ce Cualli Ohtli, 250; en total 1 995 acciones.

Como una medida de presión para la agilización de los trámites correspondientes para la adquisición del terreno, las cuatro organizaciones realizaron una marcha el 8 de septiembre de 1985 hacia EM, donde, como acto simbólico de ocupación, plantaron árboles. Se trató de una “invasión ecológica para no exponer a la gente” (Marco, 3 de septiembre de 2012).⁴ Se refiere a la exposición a la represión, pues la respuesta de las autoridades ante las invasiones, cuando estas no eran encabezadas por algún grupo del partido oficial, se había tornado intolerante.

Después del terremoto del 19 de septiembre de 1985, las organizaciones se presentaron ante Fonhapo como “damnificados desde antes del temblor” (Andrea, 25 de mayo de 2012). “Los sismos sensibilizaron a que las organizaciones podíamos construir por autogestión. Íbamos delante de los damnificados” (Marco, 3 de septiembre de 2012). Una vez cumplidos los requisitos, las organizaciones pudieron asentarse en el predio.

Como instancia de representación y deliberación de los asuntos de interés común, las cuatro organizaciones formaron la Coordinadora de El Molino.⁵ Durante el proceso de gestión del crédito, la construcción de las viviendas y la gestión de los servicios, la Coordinadora, conformada por los representantes de

⁴ Se citan extractos de relatos de prácticas obtenidos por medio de entrevistas realizadas entre abril de 2012 y agosto de 2013. Los nombres de los actores han sido modificados salvo en los casos en que el entrevistado solicitó ser reconocido.

⁵ Llamada informalmente por los actores, a manera de broma y autoinscripción como proceso democrático de izquierda: “Coordinadora de la República Democrática del Molino”.

las organizaciones, se reunía al menos una vez por semana. Algunos acuerdos, como el equipamiento del predio, implicaron años de discusión.

A su manera, cada organización trató de llevar a cabo procesos autogestivos que favorecieran la participación comunitaria y la solidaridad de grupo. UCISV Libertad, cuyo “nombre de lucha” es Cananea, se constituyó legalmente en 1984. Antes de su fundación, formó bases de solicitantes, quienes realizaban trabajo organizativo como la colecta de recursos, la realización de asambleas, pintas y volanteo. Varios solicitantes se sintieron atraídos por una organización que no era del PRI y en la cual confiaban, principalmente porque sus líderes más visibles eran universitarios (Joel, 21 de mayo de 2012).

Su estructura fundacional fue horizontal, teniendo a la Asamblea General como máximo órgano de decisión, así como Asambleas de Base, una Asamblea de Coordinadores y un Consejo Ejecutivo. Se organizaron comisiones que iban desde asuntos financieros, hasta la medición de la participación de cada familia y la resolución de conflictos.

Entre 1985 y 1991, la organización contó con la asesoría del Centro de la Vivienda y Estudios Urbanos (Cenvi), que consistió en el acompañamiento del proceso participativo de diseño urbano y habitacional, así como la dirección de la obra.

La Unidad de Cananea se construyó autogestivamente, desde la preparación del terreno y el diseño de las viviendas hasta la traza de las calles en el predio. La solidaridad fue un valor fundamental en este proceso; así, por ejemplo, el trabajo de autoconstrucción en tres etapas de las 1 086 viviendas se dio en conjunto, pues todo el colectivo trabajó en la construcción de la totalidad de las casas, no sólo en la propia. Se crearon brigadas y cuadrillas de construcción por parte de los mismos solicitantes, además de mano de obra contratada. La adjudicación de las mismas se decidía en asamblea, considerando a las familias con mayor calificación en un sistema de puntos que se utilizó como mecanismo de medición de la participación de cada familia (aunque con dicho

sistema, algunas personas se preocuparon más en ganar puntos para sí que en el trabajo colectivo). Existía además un fondo solidario para hacer préstamos a las familias que más lo necesitaran.

Una vez construida la Unidad, la lucha de los años posteriores fue por los servicios básicos de agua, luz, pavimentación y alumbrado público. El problema del drenaje se resolvió inicialmente con el Sistema de Reciclamiento de Desechos Orgánicos (SIRDO), que fue instalado por el Grupo de Tecnología Alternativa (GTA). Este Sistema se adoptó como medida emergente ya que en la gestión del crédito de Fonhapo era requisito contar con las condiciones mínimas para la introducción de los servicios. También utilizado por Ce Cualli Ohtli y USCOVI, el SIRDO era un sistema que transformaba los desechos orgánicos en abono; pero este no resultó útil y tuvo que ser sustituido posteriormente por drenaje convencional.

Para una segunda etapa de la Unidad Cananea, en 1987 se construyeron 388 viviendas más, echando mano de material fabricado por la propia organización, gracias a la instalación de una tabiquera con el apoyo de la agencia holandesa de cooperación internacional Novib. En 1989, se terminaría la tercera etapa de la Unidad con la entrega de 248 viviendas. Entre 1990 y 1994 se gestionó el equipamiento compartido con las demás organizaciones y una vez que la mayor parte de los miembros de la organización había cubierto su crédito se inició el proceso de escrituración.

La vivienda pasó de concebirse como una necesidad a verse como un derecho. Miguel, líder de Cananea, señala: “la vivienda fue un pretexto para crear un territorio, una comunidad y no quedarnos solamente con la vivienda”. Los habitantes de Cananea construyeron socialmente un hábitat comunitario, no sólo viviendas. Tal hábitat se construyó a la par que se construía ciudadanía, pues la vivienda, según este líder, es vista por la organización como “el derecho a un territorio, que es el derecho a una comunidad, que es el derecho a una ciudad”. Roberto (25 de mayo de 2012), fundador de Cananea, subrayó: “esto es un pro-

yecto político. Para nosotros el objetivo es hacer una sociedad nueva, una sociedad diferente”.

USCOVI comenzó a gestarse desde 1979 como cooperativa de vivienda. El aniversario de USCOVI es conmemorado tomando en cuenta la fecha del 16 de mayo de 1982, pues fue entonces cuando se constituyó formalmente la cooperativa con socios de cuatro secciones: Liberación del Pueblo, Las Torres, Jacinto Canek y Pueblo Unido (esta última sección fue la que se asentó en EM).

Originalmente, USCOVI estuvo relacionada con la organización maoísta Movimiento Revolucionario del Pueblo (MRP), después transformada en Organización Revolucionaria del Pueblo (ORP) y que en 1993 sería parte de los fundadores de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT). Los líderes originarios de USCOVI eran en su mayoría egresados universitarios; quienes estaban “atrás de las utopías” y querían “formar comunidades en lucha” (Magdalena Ferniza,⁶ 19 de junio de 2012). La estructura de la cooperativa se constituyó por una Asamblea General, un Consejo de Administración, un Consejo de Vigilancia y comisiones.

Las viviendas de USCOVI se construyeron entre enero y septiembre de 1986, en un exitoso proceso autogestivo que permitió a la cooperativa terminar con números negros. Los socios de la Cooperativa se organizaron en brigadas, logrando construir en nueve meses 274 viviendas. La asignación de éstas se hizo con base en un sistema de puntos que medía la participación de las familias.

Aunque el crédito estaba proyectado para pagarse en 15 años, en 1991 USCOVI lo liquidó ante Fonhapo y la cooperativa entró en proceso de liquidación. A partir de entonces, la cooperativa vive inmersa en un conflicto entre dos grupos que desean regularizar

⁶ La entrevistada prefirió ser identificada con su nombre, pues “el nombre engloba todo lo que uno es”.

su propiedad, con la diferencia de que uno de ellos busca la continuidad de la cooperativa y el otro no.

En 1985, 384 familias fundaron la Sociedad Cooperativa de Vivienda y Servicios Habitacionales Allepetlalli. Los líderes de la organización provenían del movimiento estudiantil, particularmente del Colegio de Ciencias y Humanidades Oriente de la UNAM,⁷ no simpatizaban con la vía electoral y no formaron parte de la Coordinadora Nacional del Movimiento Urbano Popular (Conamup), espacio de confluencia de las organizaciones populares urbanas de la época.

Esta cooperativa echó a andar la construcción de sus viviendas hasta 1988. Se organizó en una asamblea general, consejos y comisiones. Fue hasta 1991 que se terminaron de construir 384 viviendas. Se trató de la única de las cuatro organizaciones fundadoras de EM que instaló un campamento con antelación a la construcción de las viviendas. Si bien se coordinó con las otras organizaciones en la gestión del crédito, no formó parte de acciones compartidas, como la utilización del SIRDO. Esta cooperativa fue la cuna del Frente Popular Francisco Villa (FPFV).

Ce Cualli Ohtli fue fundada por 250 familias como una sociedad cooperativa en 1984. Varias de estas familias se reunían en Santo Domingo, Coyoacán, convocadas por un líder de la unión de colonos de dicha colonia. En ese espacio conformaron un grupo de solicitantes de vivienda, pero cuando el líder les pidió una comisión para la consecución de créditos de vivienda y como honorarios por asesoría técnica, decidieron separarse de él y formar su propia cooperativa liderada fundamentalmente por mujeres.

Tanto Ce Cualli Ohtli como la USCOVI fueron asesoradas por el arquitecto Mario Larrondo. La construcción de viviendas comenzó en 1986 y fue realizada por contratistas y jornaleros, pero también hubo voluntarios de la cooperativa que trabajaron en

⁷ Mario Larrondo describe a esta organización como “un sector medio raro de estudiantes que era una cooperativa que se llamaba el Maguey Ardiente, misma que después se convirtió en Allepetlalli” (citado en Cortés y Fuentes, 2008).

comisiones. Las 250 viviendas fueron terminadas en obra negra en 1989; como ocurrió con las demás organizaciones, también fueron asignadas mediante un sistema de puntos que calificaba la participación de cada familia.

La organización tuvo una aproximación a la CUT, pero no se ha inscrito en la lógica de los partidos. Hoy en día, la Cooperativa funciona aún con un Consejo que se renueva cada dos años. Bajo esta instancia de representación de los vecinos se han gestionado diversos proyectos, sobre todo con recursos delegacionales, tales como una cerca electrificada, alarmas y cámaras de vigilancia (Silvia, 15 de julio de 2013).

Entre 1989 y 1991 se dio un proceso de invasión del extremo sur del predio EM, a cargo del Consejo Agrarista Mexicano, de filiación priísta. Se formó así la colonia Rinconada El Molino, la cual no ha contado con una figura organizativa de interlocución con el resto de los actores; a pesar de que en algunas ocasiones se incorporaron a la instancia de coordinación del predio y hasta la fecha se refieren a ellos como “los priístas”.

A partir de 1992, nuevas agrupaciones ocuparon el predio, como el caso de Nueva Generación (360 viviendas). Desde Allepetlalli, el FPFV dirigió cinco invasiones en EM, las cuales después se regularizaron (Álvarez, 2004; Ferniza, 2007): Nahalti (160), Tlaltenco (504), Moyocoyani (120), Unidad Habitacional Frente Popular Francisco Villa (781) y Huasipungo (176).

En EM no sólo se construyeron casas, sino todo un entorno social y político; un hábitat, que es “aquel lugar donde un ser humano construye relaciones simbólico-espaciales que dan sentido y significación a la acción de habitar; y lo urbano, que es aquella configuración del territorio relacionada con su entorno y con las prácticas culturales que surgen allí” (Carvajal, 2009: 21).

EM, como proyecto autogestivo, es un caso exitoso de “producción social del hábitat”, término que surgió en América Latina en la década de los setenta para caracterizar procesos colectivos de construcción del hábitat caracterizados por la gestión organizada y la participación democrática de las bases de colonos y solici-

tantes (Naciones Unidas-Hábitat, 2006). EM nació políticamente bajo un proceso de participación legal y legítimo que configuró un espacio de interlocución y disputa que, con sus altibajos de participación, sigue aún vigente.

LA CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA

En este trabajo, la construcción de ciudadanía es entendida como un proceso de lucha permanente de los habitantes urbanos por su pertenencia a la ciudad, por ejercer sus derechos formales y acceder a los recursos de la sociedad, así como por crear, preservar y transformar el orden social mediante prácticas sociales y políticas espacialmente diferenciadas. Esta ciudadanía práctica se ejerce en un entorno caracterizado por la desigualdad social, el conflicto, la eventual cooperación y la pérdida de exclusividad del Estado como actor político.

La ciudadanía, más que un estatus, es un conjunto de prácticas sociales. Miguel (7 de julio de 2012), líder de Cananea, aporta la siguiente definición:

La ciudadanía se construye desde dos perspectivas. Una, participas para exigir tus derechos pero —segundo— también eres corresponsable en el ejercicio de los derechos. No nomás exiges sino también propones, para mí la ciudadanía es eso. El ciudadano no es el que va a votar cada tres años, el ciudadano es quien se organiza para exigir tus derechos, pero que también te haces corresponsable de promover los derechos tuyos y los de la gente. Eso es construcción de ciudadanía.

El proceso de construcción de ciudadanía en EM se enmarca en un proceso político amplio: la trayectoria del Movimiento Urbano Popular (MUP). Se trata de un movimiento con auge en la década de los ochenta, formado primordialmente por colonos, inquilinos, solicitantes de crédito, damnificados y mujeres (Ramírez Sáiz, 2005: 118). Varias organizaciones constitutivas del

movimiento aprovecharon la apertura del Fonhapo y gestionaron créditos de vivienda desde 1981. De esta manera, siguieron una ruta legal para acceder al suelo urbano y así procedieron a lo largo de esa década organizaciones como Asamblea de Barrios (AB), la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata (UPREZ) y el Frente Popular Francisco Villa (FPFV).

Desde los inicios del MUP, las mujeres jugaron un papel preponderante, ya que lograron desarrollar su estima personal y conocer un mundo más amplio que el doméstico: se politizaron. El siguiente es testimonio de dos mujeres fundadoras de Cananea (Mariana y Andrea, 25 de mayo de 2012):

[...] venía yo a veladas y vi otro tipo de manera de vivir, o sea colaborando para obtener un beneficio que era para la comunidad [...] Cuando yo llegué acá era otro mundo para mí [...] aquí aprendí a cómo se agarra una carretilla, cómo se agarra una pala, cómo se escarba, todo eso aprendí aquí [...] Yo ya tengo 60 años y me quiero ver ocupada en cosas que sean del bien común para todos [...] no veo telenovelas.

Allá [casa anterior] yo nomás estaba en la casa, esperando a qué hora llegaba mi esposo [...] la lucha es una experiencia que la volvería yo a vivir [...]

A excepción de Allepetlalli, las organizaciones fundadoras de EM, con una importante participación de mujeres, formaron parte de la Coordinadora Nacional del Movimiento Urbano Popular (Conamup), formada desde 1981 y desintegrada diez años después ante la entrada al juego electoral de varias de las organizaciones que la integraban. En la actualidad, el MUP vive una etapa de latencia, con organizaciones que han perdido el peso político con el que contaron en los años ochenta, pero que aún forman parte del juego político entre la vía electoral y la izquierda social.

En 2010, las organizaciones del MUP⁸ y el gobierno de la ciudad firmaron la “Carta de la ciudad de México por el derecho a la ciudad”. En esta iniciativa surgida y negociada desde 2007⁹ se incluye una serie de ejes estratégicos para el ejercicio del derecho a la ciudad. En la actualidad, el MUP es un actor latente, con un discurso de derechos pero también con algunos grupos cuyas prácticas se encuentran aún arraigadas en el clientelismo autoritario.

Así como el MUP en general, el proceso político de EM en particular fluctúa entre la interlocución y la disputa, tanto entre sus organizaciones como entre éstas y las autoridades. En EM se identifica una cultura política autoritaria, basada en la confrontación, pero también una cultura política democrática, fundamentada en la toma de decisiones desde la base de las organizaciones. Por ejemplo, los proyectos colaborativos de Cananea contrastan hoy en día con las cuotas que pagan algunos “beneficiarios” del FPFV.

Así como la Coordinadora nació a manera de mecanismo de diálogo entre las organizaciones, la disidencia, conformada por grupos políticos más afines a la política de partidos, constituyó otra instancia de representación: la Coordinación de Unidades Habitacionales. Desde la Coordinación se conoce a la Coordi-

⁸ Organizaciones agrupadas en el denominado Movimiento Urbano Popular de la Convención Nacional Democrática (MUP-CND). La CND es la instancia de coordinación entre diversas organizaciones y actores sociales que nació en el conflicto poselectoral de 2006, formando la base social del movimiento liderado por el ex candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador. El MUP-CND incluye a las organizaciones sociales más importantes de la llamada izquierda social en la ciudad, tales como la Asamblea de Barrios (AB), la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata (UPREZ) y el Frente Popular Francisco Villa (FPFV).

⁹ Aunque, de acuerdo con Cristina Sánchez-Mejorada (2011), los antecedentes de esta Carta pueden rastrearse desde el año 2000, con la realización de la Asamblea Mundial de Pobladores en el DF. Después vendría en 2001 el Foro Social Mundial y en 2005 el Encuentro Nacional del MUP, donde se discutió el tema del derecho a la ciudad. Es en 2007 cuando con esos antecedentes las organizaciones social y civiles convocan a la construcción colectiva de la Carta.

nadora como “los históricos”, en el sentido de que aquella se conformó con las organizaciones fundadoras del predio, mientras que la Coordinadora tacha a la Coordinación de “partidista”.

En EM también es vigente el conflicto entre quienes defienden el proyecto colectivo y quienes han buscado prioritariamente su propiedad privada. Esto puede ejemplificarse con el conflicto existente en la USCOVI entre el grupo defensor de la continuidad de la organización y el grupo que desea dar fin a todo proyecto colectivo, perdonar adeudos y desaparecer la cooperativa.

No obstante las diferencias, en determinadas coyunturas, las organizaciones de EM han formado un frente común ante la autoridad. Esto puede ejemplificarse con los sucesos derivados de un intento de desalojo de locatarios del mercado de Cananea Sara (10 de julio de 2012) narra lo acontecido:

Esa vez sí se juntaron, no solamente los dirigentes o los responsables de las organizaciones, la gente, la gente de Cananea, la gente de aquí de Tlaltenco, del campamento [...] Había camiones desde aquí [refiere a las cercanías del mercado de Cananea] hasta Canal de Chalco [límite del predio] [...] La gente en lugar de atemorizarse, o en lugar de intimidarse, no, le salió lo Zapata y lo Villa. “¡No saben a dónde se vinieron a meter!” “¡Aquí el Molino es otra cosa y a como quieran!” [...] salía gente de todos lados [...] Ese sí fue un momento en que se juntó todo el Molino, en contra de la Delegación, de la gente de gobierno y pá atrás los granaderos.

EM no es una zona totalmente fuera del control estatal, pero sí es un lugar donde el control ejercido por las organizaciones incide en las prácticas de los habitantes quienes, aún con sus diferencias políticas, son capaces de crear un frente común ante intervenciones estatales consideradas ilegítimas. En este lugar, la ciudadanía se verifica al practicarse (Turner, 1993), coincidiendo así con la definición de Sergio Tamayo (2010: 9), quien postula que ser ciudadano significa “participar en la creación, preservación y transformación del orden social”.

Las prácticas constructoras de ciudadanía en EM han sido tanto legales (como la compra de terreno y la gestión de los servicios) como ilegales (invasiones de diversos grupos); han estado dentro y fuera de los límites de la política estatal, es decir, se han posicionado en los márgenes de la política posliberal (Arditi, 2010). Históricamente, organizaciones madre como la UPREZ y el FPFV¹⁰ actúan políticamente tanto en los medios institucionales (como las elecciones), como fuera de esos límites, con acciones políticas de protesta y confrontación. En EM, la política es una práctica social que no siempre obedece necesariamente a los tiempos y reglas estatales.

Desde su origen, EM ha sido reconocido como un espacio de izquierda:

Llegaron militantes de partidos y organizaciones de izquierda, hasta del Grupo Armado Revolucionario del Niño Jesús, como diría Luis Buñuel, de todos lados. Y lo que nosotros nos planteamos [...] fue convivir, aprender todos a convivir. Por fin una demostración de que la gente de izquierda, aún estando en diferentes organizaciones, podemos convivir, planear y hacer un trabajo común, respetuoso [...] Muchos reivindicamos a El Molino como el mayor asentamiento popular organizado por la izquierda [...] por un grupo de organizaciones de izquierda (Marco, 3 de septiembre de 2012).

EM es hoy en día una buena fotografía de la izquierda mexicana, dividida en fracciones colocadas primordialmente dentro de los partidos políticos, pero también con pequeños grupos autogestivos más afines a la izquierda social. En términos de Francisco (21 de mayo de 2012) “todos son de izquierda, pero hay de izquierda a izquierda, los medios de trabajo son diferentes”. A su vez, algunos grupos construyen ciudadanía, otros reproducen prácticas clientelares y de control político. En EM hay prácticas

¹⁰ En EM también han tenido influencia organizaciones como la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y la Organización Nacional del Poder Popular (ONPP). Aquí se retoma a la UPREZ y el FPFV como ejemplos de organizaciones madre que han actuado dentro y fuera de la institucionalidad estatal.

diferenciadas de ciudadanía, lo cual puede ilustrarse con el proceso político marcado por sus organizaciones (cuadro 1).

Cuadro 1

LA CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA POPULAR EN EL PREDIO EL MOLINO

<i>Organización</i>	<i>Construcción de ciudadanía popular</i>
Allepetlalli	Con una postura inicial de confrontación ante la autoridad, la organización logró acuerdos con las organizaciones fundadoras para la gestión del territorio. Sus habitantes han dejado de estar corporativizados al PFPV y participan en diversos grupos políticos de izquierda.
Ce Cualli Ohtli	Cooperativa donde ha prevalecido la participación preponderante de las mujeres. Hoy en día es intensa la participación política a nivel comunitario, con tres instancias de representación: representantes por condominio, Consejo de Administración de la Cooperativa y Comité ciudadano. Existe una conflictividad latente entre grupos que buscan la permanencia de la Cooperativa y quienes no.
Frente Popular Francisco Villa, México Siglo XXI (FPFV-MS XXI)	Organización vinculada al PRD, con fluctuación en alianzas con diversas corrientes. Prevalecen en ella prácticas clientelares y autoritarias, tales como el cobro de "multas" a militantes que no participan en las convocatorias de la dirigencia.
Tlanezi-Calli	Organización identificada con el neo-zapatismo, respecto de la autogestión de la comunidad. Presenta una posición de autonomía ante los partidos políticos.
UCISV-Libertad (Cananea)	Originalmente organización "de masas", hoy se encuentra dividida entre la participación política partidista y la participación mediante proyectos autogestionados legitimados con un discurso de derechos. Un sector de la organización participa con la UPREZ.
USCOVI-Pueblo Unido	Cooperativa dividida entre grupos que participan políticamente dentro y fuera de los partidos políticos y ciudadanos ajenos a las organizaciones, pero igualmente interesados en la regularización de la propiedad. Ante el conflicto permanente, no se consolidó un proyecto colectivo consensuado y se encuentra en disputa la continuidad o no de la Cooperativa.

Fuente: Elaboración propia a partir de información recabada en campo de seis organizaciones con base en el predio.

En EM es posible observar la construcción de ciudadanía tanto sustantiva como precaria (Durand, 2010). Es sustantiva cuando grupos participativos encabezan proyectos comunitarios autogestivos y toman parte de las decisiones colectivas, pero es precaria cuando existen grupos subordinados a los designios de organizaciones de mando vertical. Los primeros luchan por el ejercicio de sus derechos, los segundos esperan la ruta que marcará su líder, partido u organización. Mientras unos construyen ciudadanía desde abajo, los otros reproducen una cultura autoritaria que favorece la prevalencia de relaciones clientelares. Esto implica formas diferenciadas y desiguales de involucrarse en los asuntos públicos.

Lleno de prácticas ciudadanas convergentes y divergentes, EM fue visto durante algún tiempo como un “territorio liberado” donde se practicaba la “autogestión territorial”. Desde entonces y hasta nuestros días, los asuntos de interés colectivo pasan por la deliberación dentro y entre las organizaciones. Durante algunos años se impidió incluso el ingreso de la policía al predio. Aún con sus diferencias, las organizaciones formaron una especie de frente común ante actos de autoridad, por ejemplo, cuando el 9 de septiembre de 1995 expulsaron de un evento público en EM al entonces regente Óscar Espinosa Villareal (Monge, 1995). O bien, como Andrea, quien increpó a un candidato a diputado por el Partido Acción Nacional (PAN) en mayo de 2012:

Vino el candidato a diputado local del PAN con personas de Cananea y de Ce Cualli [...] Voy y le digo “oiga, usted no tiene que estar aquí, para estar aquí, usted tendría que haber ido a pedir permiso a nuestra organización, porque usted está adentro de nuestra organización, así que le pido por favor que se salga a la calle, allá está la calle [...] el Consejo Político de Cananea se reúne todos los lunes en la Tabiquera, así es que ahí puede ir a pedir permiso.

Ahora bien, el activismo político no es un hecho generalizado. Una vez que se logró liquidar los créditos y obtener los servicios básicos, la mayor parte de los colonos comenzó a dedicarse

primordialmente a su vida privada. Refiriéndose al proceso de Cananea, apunta Andrea (10 de julio de 2012): “ya no somos una organización de masas como cuando solicitamos la vivienda [...] Fue agotador: las construcciones, terreno, crédito, servicios. Por eso muchos ya no participan.” La desmovilización se agudizó además con la incorporación de algunos liderazgos y colonos de las organizaciones a la izquierda partidista.

No obstante la desmovilización, gracias a la latencia de los conflictos colectivos entre los diversos grupos que comparten el mismo predio, “quedó instalada una cultura del diálogo, de la propuesta y de la movilización” (Miguel, 22 de abril de 2012). Existe así un contraste al haber “una cultura de participación pero también desinterés” (David, 23 de agosto de 2012). “Hay un reflujo de la participación [pero] nos quedamos con los proyectos comunitarios” (Rubén, 21 de junio de 2012). Las minorías activas de EM mantienen vigente el proyecto de un orden social y urbano alternativo:

[...] eso era lo que queríamos, modificar la conciencia, hacer cosas en que la gente dijera, vale la pena organizarse y luchar; si invado me estoy exponiendo, estoy obteniendo una casa de mala calidad, mi salud se va a deteriorar, si lucho por algo mejor, voy a obtener algo mejor, voy a vivir mejor, voy a pensar mejor y voy a ayudar a los demás mejor [...] Me gusta mucho ver a los señores ya mayores que dicen “aquí nos toca hacer un México diferente”, los escuchas decir eso y dices “para eso se hizo”; “es que tenemos que construir un mundo diferente al que hay allá afuera, otro México”, claro que es precioso escucharlo 25 años después (Marco, 3 de septiembre de 2012).

LA LUCHA POR EL ESPACIO PÚBLICO URBANO

El espacio público urbano es producto de la relación dialéctica entre ciudad y ciudadanía; es el sitio donde se territorializan las luchas de poder que buscan definir lo común, manifiesto y accesible para la colectividad. En el contexto de una sociedad desigual,

este espacio es producto y productor de prácticas sociales de inclusión y exclusión, cooperación y conflicto.

El espacio es una construcción social que está siempre en formación, es producto de interrelaciones y da cabida a la multiplicidad, pues en él coexisten diversas trayectorias (Massey, 2005). Este espacio se constituye de las prácticas de los sujetos que lo ocupan (Ramírez Kuri, 2009a: 21-22). El espacio social se constituye a partir de las posiciones y disposiciones de sujetos diferentes y desiguales, quienes entran en relaciones de cooperación y conflicto (Ramírez Kuri, 2009a: 24). La sociedad se produce a la par de su espacio (Massey, 2005: 123).

Lo público, de acuerdo con Nora Rabotnikof (2005: 28-30), tiene tres sentidos: 1) lo común en contraposición a lo privado, 2) lo manifiesto en contraposición a lo secreto y 3) lo abierto en contraposición a lo cerrado, sin embargo, estos atributos no son atribuibles a todo espacio. Así, el espacio público es particularmente aquél que se configura en las disputas sociales y políticas por definir lo común, lo manifiesto y lo abierto.

El espacio público urbano en EM ha sido forjado al calor de las disputas entre organizaciones y entre éstas y las autoridades. Destaca fundamentalmente el caso del “Cinturón Verde” (nombrado así por las propias organizaciones), que es el espacio destinado, según el Plan Maestro original, para el equipamiento del predio, y por tanto para la ubicación de los espacios de uso colectivo. Originalmente, el gobierno de la ciudad planeaba construir la continuación del Eje 10 Sur en dicho espacio. Las organizaciones se opusieron: “si pasa un eje vial nos divide” (Francisco, 21 de mayo de 2012).

Tras un proceso de lucha política, las organizaciones demostraron “técnica y socialmente la inviabilidad del eje vial” (Ferniza, 19 de junio de 2012) y lograron que en 1993 se expidiera un decreto para reconocer a EM como una Zona Especial de Desarrollo

Controlado (Zedec).¹¹ En dicho ordenamiento, se reconocía la capacidad de las organizaciones por decidir los equipamientos urbanos a instalar en el Cinturón Verde. En el Plan de Desarrollo Urbano Delegacional de 2008 se derogó la Zedec, para entonces convertirla en Programa Parcial de Desarrollo urbano, “sin que se haya tomado en cuenta a la gente [...] no se hicieron mesas de consulta” (Rubén, 21 de junio de 2012). Horacio Martínez, Delegado perteneciente a la corriente Nueva Izquierda, impulsó la anulación de la Zedec, pues pretendía consolidar a la Coordinación afin a su grupo político, a su vez que asentaba un golpe político a la Coordinadora.

El Cinturón Verde es un territorio en disputa, donde el reconocimiento de las ocupaciones fácticas ha sido la norma. Incluso en este espacio ha habido invasiones posteriores de grupos como la organización Nueva Generación (desprendimiento de Cananea) y la ONPP. Se trata de un espacio siempre en transformación, lo que nos permite observar cómo el espacio es dinámico e histórico, por eso nunca está terminado.

Ante la pregunta “¿El Cinturón Verde es de todos?”, Sara (10 de julio de 2012) ríe a carcajadas y responde: “es de todos, pero ya así sobre los hechos cada quien se fue instalando”. De acuerdo con Saúl (24 de junio de 2012), la ocupación del espacio “se fue dando de manera natural”. Por “natural” entiende sobre todo al hecho de que las organizaciones ocuparon los espacios próximos a sus territorios. Las ocupaciones para la instalación de equipamientos tienen un reconocimiento fáctico; se respeta el control de cada organización sobre los espacios ocupados, aún cuando se esté en desacuerdo. El espacio público en EM es potencialmente de todos, se construye en virtud de procesos políticos de interlocución y disputa; aunque puede ser usado por cualquier persona.

¹¹ Cabe destacar que Allepetlalli estuvo en contra de que EM fuera declarado como un desarrollo urbano controlado, pues buscaba su declaración como zona habitacional, a fin de impulsar proyectos de vivienda. Proyectos que el FPFV llevó a cabo en contra de la voluntad de las demás organizaciones.

Coincidiendo con los planteamientos que Duhau y Giglia (2008: 345) hacen para el espacio público popular, en EM existen arreglos no escritos entre los habitantes para el uso de la calle. Cada organización reconoce sus lugares y los de sus pares. Así, cada unidad habitacional cuenta con sus respectivas rejas de protección. En USCOVI incluso los automóviles son encerrados en jaulas metálicas; esta delimitación es patente también para los extraños, por ejemplo, el caso de narcomenudistas en vía pública: “donde se plantan los que venden droga, ahí estamos parados, sin confrontar, hasta que ellos entienden que este territorio es nuestro y que no es de ellos” (Miguel, 7 de julio de 2012).

Desde la perspectiva de Fidel (6 de agosto de 2012), “todas las organizaciones tienen su coto de poder”. Desde el asentamiento de las cuatro organizaciones fundadoras se acordó que “cada una iba a tener su territorio” (Miguel, 7 de julio de 2012). Cada organización controla sus propios espacios; particularmente para jardines de niños y centros culturales; espacios que se encuentran dentro de cada unidad habitacional y no en el Cinturón Verde.

Entre las propias organizaciones existen acusaciones mutuas de privatización de los espacios. Saúl (24 de junio de 2012) de Tlanezi, por ejemplo, piensa que la plaza cívica, controlada por Cananea y el PPFV- México Siglo XXI (escisión del PPFV), “ahora está convertida en un tianguis y negocio de unos cuantos”; además de que “las canchas de fútbol están administradas por unos privados”. Paradójicamente, su organización mantiene ocupada como estacionamiento privado una parte del Cinturón Verde, pero señala que ésta es “de manera provisional [...] no va a ser estacionamiento, sino que va a ser un proyecto productivo”. No especifica qué proyecto ni cuándo terminará la “ocupación provisional”.

Existe pues una concepción ideal del espacio público como espacio de todos, así como una concepción real de los espacios públicos como espacios potencialmente de todos. Así, puede identificarse una crisis del espacio público ideal, ante la cual existe

una respuesta política que se manifiesta a la manera de disputas por definir la publicidad de tal espacio.

En contraste con el proceso integrador de proyectos como los encabezados por Cananea (destaca el proyecto de agricultura urbana en el que puede participar cualquier persona interesada), en el espacio público de EM existen fronteras materiales y simbólicas. Coexisten dos mercados, uno gestionado por Cananea (Mercado con el mismo nombre) y otro por el FPFV-XXI (Mercado El Molino). Inicialmente, el mercado del FPFV se encontraba en las inmediaciones de Allepetlalli; pero la organización decidió trasladarlo al área de equipamiento, justo a un costado donde Cananea ya tenía un mercado.

La gestión de los dos mercados representa las diferencias políticas entre ambas organizaciones. Los locatarios del mercado Cananea deben cumplir con sus obligaciones de acuerdo a la administración, pero los locatarios del mercado El Molino además deben cumplir con sus obligaciones dentro del Frente, entre las cuales se incluye la aportación de una cuota para la organización. Los muros de ambos mercados anuncian el programa de su respectiva fiesta de aniversario, evento con una importante significación política: la mejor fiesta se traduce en una demostración de poder.

En un rescate del proceso organizativo del mercado de Cananea y su diferenciación del mercado del FPFV-XXI, Joel afirma:

este es un proceso democrático, no es como este de acá [mercado del FPFV-XXI], que hay líderes, ellos dicen lo que se hace, los llevan a marchas a fuerzas, les aplican multas, acá no, acá todo se desarrolla en la Asamblea [...] Ellos andan con los chuchos [corriente del PRD] [...] Nuestro trabajo es por comisiones, aquí no hay líderes.

El derecho de ocupación de los espacios no refiere necesariamente a una dimensión legal sino a la legitimidad de la lucha política de cada organización para la gestión de su territorio. Se refiere al esfuerzo y la superación de condiciones precarias como una trayectoria que legitima las ocupaciones en el espacio colectivo.

Ese derecho es reivindicado incluso con la fuerza física, tal como ocurrió ante el intento de desalojo por parte de los locatarios de Cananea en contra del mercado del FPFV. El mismo David agrega: “nos quisieron desalojar los compañeros de Cananea pero les pusimos una paliza, tuvimos que responder”.

Tanto entre los dos mercados como en la plaza cívica contigua, se encuentra trazada una línea blanca. Se trata de la “frontera entre villistas y zapatistas”;¹² los domingos, el tianguis de Cananea no puede invadir el territorio y viceversa. Ni Villa ni Zapata le dan nombre al espacio reconocido sólo como “la Plaza Cívica El Molino”, la cual surgió tras el triunfo electoral del PRD en la primera elección para jefe de gobierno del Distrito Federal: “la Plaza Cívica fue casi lo primero que hizo la Delegación cuando ganamos en el 97” (Andrea, 25 de mayo de 2012).

La conflictividad entre organizaciones es el ingrediente ineludible en la construcción de todo espacio público en EM. Ante la construcción del nuevo “Centro Ecológico Deportivo Cinturón Verde”, existió un conflicto entre las organizaciones para la gestión del proyecto financiado por las autoridades locales y federales. En lo que sí hay coincidencia es en la necesidad de ese nuevo espacio, que antes fungía como un tiradero irregular, donde incluso llegaron a encontrarse cadáveres. Además de que “ahí, en esa parte, no había construido nadie nada” (Andrés, 10 de julio de 2012); se trataba de un espacio fuera del control de alguna organización.

En este caso, no prevaleció la coordinación ni la interlocución entre las organizaciones. El parque pudo ser construido tras el acuerdo de algunos miembros de las organizaciones presentes (fundamentalmente de las unidades del FPFV) en la asamblea realizada con las autoridades y el descontento de quienes estuvieron en minoría: “ellos siempre dan madrugete, los López Villanueva son alevosos, como trabajan en gobierno se dan cuenta de muchas

¹² Según la denominación de Sara, militante del FPFV-XXI; en referencia a la división territorial entre el espacio de Cananea y el de su organización.

cosas, [...] entonces se adelantan [...] nosotros no teníamos gente” (Andrés, 10 de julio de 2012). “El Frente llevó a su gente y ganó todos los comités [...] trabajan en la Delegación” (Silvia, 15 de julio de 2013). Anteriormente existían otros proyectos para la construcción en tal espacio, como una alberca, pero al final ganó la opción con mayor peso en la coyuntural correlación de fuerzas.

El desacuerdo entre las organizaciones respecto del nuevo parque también se manifestó, por ejemplo, en las diferencias en lo relativo a lo que debería plasmarse en un mural que se encuentra en tal espacio. Andrea, de Cananea (25 de mayo de 2012), relata la siguiente:

Estaba una del Frente diciendo “¡Yo quiero que se ponga que la lucha de nosotros fue a pueros madrazos que nos dimos!”, y yo levanto la mano y le digo “¿sabes qué?, nosotros aquí en El Molino, nunca, nunca fuimos a golpes, nuestro objetivo siempre fue el diálogo, dialogar, si ustedes hicieron eso, aquí no”, le digo, “ni cuando se vinieron a poner a fuerzas al mercado, que ya había mucha gente inconforme”, ¿no?, porque ya estábamos nosotros y ahí vienen ellos a fuerza, entonces era como para provocar, pero dijimos, “ya total, que haya dos mercados, ¿qué nos quita?”.

Un grupo de Cananea decidió hacer su propio mural en los muros de la hacienda. Tanto para demostrar su autonomía ante las decisiones de la Delegación, como para distanciarse de los partidos políticos, quienes habían ocupado esos muros para pintar propaganda electoral: “La hacienda no es barda de los partidos. Pintan sin pedir permiso” (Rubén, 21 de junio de 2012). El “permiso”, evidentemente, lo otorgaría en su caso la organización que controla ese espacio.

En el Cinturón Verde se construirá aquello que permita la coyuntura política y la correlación de fuerzas entre las organizaciones y entre éstas y las autoridades. Cuestionada sobre el futuro de este espacio, Magdalena Ferniza (19 de junio de 2012) asegura que “no importa la legalidad o no de los acuerdos, va a importar

lo que las comunidades decidan”. La normatividad del espacio público en EM obedece más a la regulación impuesta y/o acordada por las organizaciones que a la normatividad institucional.

Refiriéndose al parque que administra, Rita señala “el espacio es directamente de la Delegación Iztapalapa” (8 de julio de 2013). En la entrevista con Saúl (24 de junio de 2012), líder de Tlanezi, al referir al nuevo espacio como “el parque de la Delegación”, este corrigió tajante al entrevistador: “¡no! No es de la Delegación, es de la comunidad”.

El espacio público es el lugar de expresión de las prácticas políticas. No es un espacio neutral, nace de la interlocución y la disputa. El espacio público en EM es una clara muestra de que lo común, abierto y accesible no lo es *per se*, sino que tales atributos son el motor de una lucha política por usar y apropiarse de lugares potencialmente de todos. Este proceso es permanente, pues la construcción de lo colectivo no termina en un espacio donde incluso quedan equipamientos pendientes que no han podido construirse dada la conflictividad entre las organizaciones.

REFLEXIONES FINALES

A tres décadas de existencia, la experiencia participativa de El Molino es una muestra de la capacidad ciudadana y popular por construir alternativas urbanas viables. Este espacio nació políticamente, como reivindicación del derecho al hábitat para grupos marginados del mercado formal de vivienda, quienes con su participación y con la idea originaria de construir un orden urbano diferente, disputan hoy su derecho a la ciudad. Una disputa que, si bien ya no involucra a las mayorías, sí permanece como horizonte de participación para las minorías activas que siguen reivindicando al predio como un nodo de resistencia ante la urbanización no incluyente.

Al hacer ciudad, los constructores de El Molino construyen a su vez su ciudadanía. Así como hay maneras de construir un

hábitat, hay maneras de hacerse ciudadano. Las maneras de practicar ciudadanía en EM se han caracterizado por el trabajo colaborativo y la pertenencia a organizaciones autoidentificadas como de izquierda. Este proceso ciudadanizante no es individual sino colectivo. Las mujeres que cambiaron su dinámica cotidiana al participar en el proceso colectivo comprendieron que su construcción como personas autosuficientes, con voz y voto corre al parejo de la construcción de su hábitat y su comunidad. El proceso participativo que dio origen a EM dotó a sus participantes no sólo de vivienda sino de su reconocimiento como ciudadanos capaces de lograr objetivos compartidos.

Como parte del Movimiento Urbano Popular, EM vivió un proceso de auge, se enfrentó a las barreras burocráticas para obtener legalmente un territorio, y tras el triunfo entró en un proceso de desmovilización, manteniendo en latencia la participación organizada. En el predio quedó sembrada la semilla de la participación, tanto en su vertiente incluyente y solidaria, como en sus prácticas afines a la cultura autoritaria y clientelar. Subsisten en EM las dos caras de la moneda, la ciudadanía sustantiva y la ciudadanía precaria; la apatía de algunos y la participación constante de otros.

La acción política es parte de la cotidianidad del predio. Dentro y fuera de los límites institucionales, en EM existen disputas, negociaciones, acuerdos y desacuerdos sobre la vida en común. Una vida colectiva que se dirime entre la interlocución y el conflicto, los acuerdos políticos de partido y entre las organizaciones. Son los actores políticos colectivos los que determinan el devenir de los asuntos públicos en el predio. Nada de interés común queda fuera del juego entre organizaciones y entre éstas y la política formal.

En EM, las múltiples versiones de la izquierda han aprendido a subsistir en vecindad. Las opciones de participación y organización, desde la vía social autogestiva hasta la electoral, aglutinan la diversidad en la similitud. Todas las organizaciones del predio se identifican como de izquierda y practican tal adscripción desde

su propia experiencia y expectativas. Con sus diferencias, la similitud de posiciones consiste en defender a EM como un espacio donde la autoridad estatal es impotente de incidir sin consultar a los ciudadanos.

Este proceso de construcción de ciudadanía popular y de izquierda empata con el proceso de construcción del espacio público. Un espacio que no es contenedor de prácticas, sino producto mismo de los conflictos existentes por definir lo común, abierto y accesible. El poder de cada organización se mide en los espacios que controla. Por ello, el poder ciudadano es tal que la autoridad difícilmente construirá algo en el Cinturón Verde sin antes lograr un consenso con los actores locales. EM es un espacio conquistado por sus ciudadanos y configurado por las disputas y acuerdos entre los mismos.

FUENTES CONSULTADAS

- Álvarez Enríquez, Lucía (2009) “Historia de la conformación ciudadana en la ciudad de México”. En *Ciudadanía, espacio público y ciudad*, coordinado por Ana Helena Treviño Carrillo y Javier de la Rosa Rodríguez. México: UACM, pp. 225-248.
- Álvarez Enríquez, Lucía (2004). *La sociedad civil en la ciudad de México. Actores sociales, oportunidades políticas y esfera pública*. México: UNAM-CEIICH, Plaza y Valdés Editores.
- Arditi, Benjamín (2010). *La política en los bordes del liberalismo. Diferencia, populismo, revolución, emancipación*. México: Gedisa.
- Arditi, Benjamín (2007). “Post-hegemony: politics outside the usual post-Marxist paradigm”. *Contemporary Politics*, vol. 13, núm. 3, (septiembre): 205-226.
- Arditi, Benjamín (2003). “El segundo circuito de la política. Una propuesta para el financiamiento público de organizaciones sociales”. En *Participación y espacio público*, coordinado por Silvia Bolos. México: Universidad de la Ciudad de México, pp. 75-90.

- Arditi, Benjamín (1995). “La política después de la política”. En *Actores sociales y demandas urbanas*, coordinado por Silvia Bolos. México: Universidad Iberoamericana, Plaza y Valdés Editores, pp. 39-73.
- Borja, Jordi y Manuel Herce (2009). “Proyectos urbanos y espacio público. Estrategias de la ciudad contemporánea”. En Martí Abella, et al. *Gestión de proyectos urbanos y espacio público*. Barcelona: UOC, pp. 5-53.
- Borja, Jordi y Manuel Herce (2002). *Ciudadanía y globalización*. Documento núm. 29. Buenos Aires: Centro de Documentación en Políticas Sociales, Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Argentina.
- Borja, Jordi, Manuel Herce y Zaida Muxí (2000). *El espacio público, ciudad y ciudadanía*. Barcelona: Electa.
- Buthet, Carlos (2005). *Inclusión social y hábitat popular. La participación en la gestión del hábitat*. Buenos Aires: Espacio Editorial.
- Carvajal, Hernando (2009). *Ciudades y ciudadanías. Una posibilidad para gobernar lo local*. Bogotá: Universidad de Tolima.
- Cortés Mejía, Francisco e Irma Fuentes Matías (1998). “USCOVI: de los sueños a los pies sobre nuestra tierra El Molino, Iztapalapa”. Disponible en <<http://uscoviquefue.blogspot.mx/>> (consultado el 2 de febrero de 2014).
- Duhau, Emilio y Angela Giglia (2008.) *Las reglas del desorden: habitar la metrópoli*. México: UAM-A, Siglo XXI Editores.
- Durand Ponte, Víctor Manuel (2010). *Desigualdad social y ciudadanía precaria ¿Estado de excepción permanente?* México: UNAM-IIS, Siglo XXI Editores.
- Ferniza Pacheco, Magdalena (2007). “Predio El Molino”. Ponencia presentada en el Encuentro Nacional para la Producción y Gestión Social del Hábita. México: UIA, 29 y 30 de noviembre.
- Flyvbjerg, Bent (2001). “Habermas y Foucault: ¿pensadores de la sociedad civil?”. *Estudios Sociológicos*, vol. 19, núm. 56, México: Colmex (mayo-agosto): 295-324.
- Madanipour, Ali (2003). *Public and Private Spaces of the City*. Londres y Nueva York: Routledge.

- Massey, Doreen (2005). “La filosofía y la política de la especialidad: algunas consideraciones”. En *Pensar este tiempo. Espacios, afectos y pertenencias*, coordinado por Leonor Arfuch. Buenos Aires: Paidós, pp. 103-127.
- Moctezuma, Pedro (2012). *La chispa. Orígenes del movimiento urbano popular en el Valle de México*. México: Delegación Iztapalapa, Para Leer en Libertad A.C.
- Moctezuma, Pedro (1999). *Despertares. Comunidad y organización urbano popular en México 1970-1994*. México: UAM-I, UIA.
- Monge, Raúl (1995). “El Molino, Iztapalapa: el montaje escenográfico que no sirvió”. *Proceso*, núm. 985, 18 de septiembre.
- Naciones Unidas-Hábitat (2006). *Foro Iberoamericano y del Caribe sobre Mejores Prácticas. Producción Social del Hábitat en América Latina y el Caribe*. Disponible en <www.unhabitat.org> (consultado el 29 de mayo de 2013).
- Paladino, Martín (2010). “Intermediación clientelar de demandas sociales y movilización política. La vivienda social en la ciudad de México”. Tesis para obtener el grado de doctor en Ciencias Sociales con Mención en Sociología. México: Flacso.
- Rabotnikof, Nora (2005). *En busca de un lugar común. El espacio público en la teoría política contemporánea* México: Instituto de Investigaciones Filosóficas, UNAM.
- Ramírez Kuri, Patricia (2009a). *Espacio público y ciudadanía en la ciudad de México. Percepciones, apropiaciones y prácticas sociales en Coyoacán y su Centro Histórico*. Posgrado en Urbanismo, PUEC, IIS, UNAM, Miguel Ángel Porrúa.
- Ramírez Kuri, Patricia (2009b). “La ciudad, espacio de construcción de ciudadanía”. En *Ciudadanía, espacio público y ciudad*, coordinado por Ana Helena Treviño Carrillo y Javier de la Rosa Rodríguez. México: UACM, pp. 65-107.
- Ramírez Sáiz, Juan Manuel (2005). “Organizaciones urbanopopulares, producción habitacional y desarrollo urbano en la ciudad de México, 1980-2002”. *Desacatos*, núm. 19. México: CIESAS (septiembre-diciembre): 113-136.

- Ramírez Sáiz, Juan Manuel (1999) [1986]. *El movimiento urbano popular en México*. México: IISUNAM, Siglo XXI Editores, segunda edición.
- Ruiz Muñoz, María Mercedes (2005). “El aprendizaje y las prácticas sociales en zonas urbanas marginales de la ciudad de México”. *Revista Interamericana de Educación de Adultos*, año 27, núm. 2 (julio-diciembre): 71-121.
- Sánchez-Mejorada Fernández, Ma. Cristina (coord.) (2011). *Evaluación del diseño, instrumentación y resultados de la política de participación ciudadana en el desarrollo social del Distrito Federal*. México: Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal.
- Tamayo, Sergio (2010). *Crítica de la ciudadanía*. México: UAM-Azcapotzalco, Siglo XXI Editores.
- Turner, Bryan S. (1993). “Contemporary Problems in the Theory of Citizenship”. En *Citizenship and Social Theory*, coordinado por B. Turner. Londres: Sage Publications, pp. 1-18.
- Velásquez, Fabio (2010) “Cultura del hábitat y ciudadanía. Elementos de política pública para Bogotá DC”. En *La gestión incluyente en las grandes ciudades*, coordinado por Lucía Álvarez Enríquez, Cristina Sánchez-Mejorada Fernández y Carlos San Juan Victoria. México: CEIICH, UNAM, UAM-A, INAH, Juan Pablos Editor, pp. 105-130.